

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (en adelante la Asociación) interpuso, en los términos del art. 476 del Código Procesal Penal, recurso de queja desde que por Resolución CNDC N° 42/11 (del 24-5-2011) se denegó la apelación deducida contra la Resolución N° 38/11 (del 11-5-2011).

En esa última decisión, el organismo rechazó el pedido de nulidad formulado contra el proveído del 8 de abril de 2011 (ver fs. 141/42), mediante el cual se hizo saber a la recurrente que el día 11 de mayo a las 11:00 horas se constituirían en el domicilio de la Asociación los peritos oficiales designados, de acuerdo con la prueba pericial contable admitida mediante la Resolución 5/10, y que se le otorgaba un plazo de cinco días para designar perito de parte (ver fs. 2428 del expediente administrativo S01:0060577/03 cuya copia certificada se tiene a la vista).

2. Dentro del objeto de la queja, la recurrente solicita la nulidad absoluta de la resolución denegatoria de la apelación, y de todo lo actuado desde la resolución del 8-5-2003 en la que se le confirió el traslado del art. 29 de la ley 25.156, por entender que la CNDC no tiene competencia para su dictado, de acuerdo con la doctrina fijada por la Corte Suprema en “Credit Suisse” y por esta Sala en las causas “AMX” (4537/10 del 10-12-2010), “SADAIC” (3839/10 del 21-12-2010) y “Fresenius” (10.507/09 del 13-5-2010).

En subsidio, pide que se declare admisible el recurso de apelación. Después de efectuar una reseña de los antecedentes del caso, funda la crítica de la resolución denegatoria (Pto. VI, fs. 235/vta.) en la nulidad absoluta de la resolución que ordenó el traslado del art. 32 de la LDC por haber sido dictada por quien no tenía capacidad de derecho para ello y en su falta de fundamentos. Recuerda, en tal sentido, que la nulidad de un acto cuando fuera declarada hará

nulos todos los consecutivos que de él dependan (art. 172 del Código Procesal Penal).

Sobre esa base, alega que la CNDC trivializó su planteo reduciéndolo a una mera disconformidad con una prueba denegada, cuando lo que discute es la nulidad de la resolución que sirve de soporte a los medios de prueba ordenados.

Por último, compara la situación *sub examine* con la continuación del procedimiento y la producción de prueba no obstante que se encuentre pendiente de decisión un auto de prisión preventiva.

3. En los términos en que ha sido fundada, la queja no es admisible.

Como primera cuestión, es oportuno señalar, respecto de la nulidad del traslado del art. 29 de la ley 25.156 dispuesto el 8 de mayo de 2003, que -sin perjuicio de la cantidad de actos posteriores que no fueron oportunamente impugnados (ver fs. 359/75 y siguientes del expediente administrativo mencionado)- el planteo excede la jurisdicción que le corresponde a este Tribunal con motivo de la queja interpuesta por haberse denegado la apelación contra la citada Resol. 38/11 del 11 de mayo pasado.

Por lo demás, los precedentes de esta Sala -que la recurrente cita- no son aplicables al caso concreto, desde que las circunstancias sobre cuya base se dictaron son distintas a las que se presentan en esta oportunidad. En los fallos invocados no se decidió acerca de la facultad de la CNDC para disponer el traslado de la denuncia o de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de oficio, en los términos del art. 29 de la ley 25.156. En la causa 4537/10 se consideró que la desestimación *in limine* de una denuncia y la orden de archivo excedía las facultades instructorias de la CNDC de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema *in re* "Credit Suisse" (Fallos 330:2527), en tanto que en la causa 10.507/10 se decidió de igual modo con respecto a la resolución que desestimó el pedido de la nulidad de una investigación y de su archivo, el cual fue deducido con sustento en vicios en la denuncia que la motivó y en la prueba acompañada con ella. Por último, ninguna relación guarda con este caso la resolución dictada en la causa 3839/10, en la cual se decidió que ni la CNDC ni el Secretario de Comercio Interior tienen facultades -como autoridad de

aplicación transitoria hasta la constitución del TNDC- para dictar las medidas cautelares previstas en el art. 35 de la ley 25.156.

4. Ello aclarado, cabe señalar con relación al art. 53 de la ley 25.156, a su decreto reglamentario y a la doctrina de “Credit Suisse” -invocados para que el organismo administrativo procediera sin otro trámite a elevar el expediente a la Alzada en el plazo allí fijado (ver fs. 213/15 y fs. 233)- que como se precisa en causa 2875/11 (ver resolución dictada en la fecha), no se advierte la necesidad de que este Tribunal se pronuncie acerca de las facultades de la Comisión o del Secretario de Comercio Interior para conceder o denegar la apelación interpuesta -práctica inveterada desde la sanción de la norma y cuyo fundamento normativo puede encontrarse en la parte final del art. 52 de la LDC-, habida cuenta de que el recurso de queja permite la revisión judicial de ese acto mediante la intervención que se ha motivado. Es decir, el pronunciamiento acerca de la procedencia formal del recurso no es definitivo ni susceptible de generarle un gravamen irreparable en ese aspecto, máxime cuando en cualquier caso es la Cámara el juez del recurso con facultades para disponer sobre su admisibilidad más allá de los actos cumplidos en la anterior instancia.

5. Los restantes argumentos tampoco son suficientes para admitir la queja deducida. Mientras que la CNDC fundó la denegatoria de la apelación en el límite recursivo del art. 33 de la ley 25.156 (ver fs. 225/26), la Asociación invoca la nulidad de la resolución dictada por esa Comisión en los términos del art. 32 por falta de capacidad y por carecer de fundamentos, y en la consecuente nulidad que ello acarrea respecto de los actos consecutivos que dependen de ella.

En primer lugar, no se puede soslayar que la propia recurrente afirmó que “jamás” esgrimió que la CNDC careciera de facultades para dictar la resolución del art. 32 LDC, y que la nulidad se imputó respecto de la decisión que rechazó la nulidad (Pto. IV, fs. 231, párrafos sexto y séptimo), circunstancia esta última que no es la que ahora se alega como argumento para fundar la queja. Sin perjuicio de dicha contradicción, en el escrito de queja no hay una argumentación razonada para justificar que el traslado del art. 32 de la ley 25.156 -para que el presunto responsable efectúe su descargo y ofrezca la prueba pertinente- es una facultad decisoria que corresponde al Secretario de Comercio Interior, y no a la Comisión, según la mencionada doctrina de “Credit Suisse”.

Cabe añadir, en lo atinente a la analogía que la Asociación invoca con la situación resultante de un auto de prisión preventiva, que las normas del Código Procesal Penal sólo resultan aplicables en forma supletoria y en cuanto fuesen compatibles con las disposiciones de la ley 25.156 (ver art. 56). Como se destacó en la resolución dictada en la fecha en la causa 2875/11, no es pertinente su alegación sin valoración alguna de las normas específicas que regulan las distintas etapas del procedimiento de la ley 25.156 que se han cumplido en las actuaciones (arts. 29 y 30; ver fs. 206 y 1461/72).

Asimismo, el argumento sustentado en la nulidad por aplicación del art. 172 del Código Procesal Penal es insustancial, habida cuenta de que no se declaró la pretendida nulidad de la Resol. 78/10 en la que se dispuso el traslado del art. 32 de la LDC, ni tampoco se hizo lugar a la queja deducida por la denegación del recurso de apelación interpuesto contra la Resol. 4/11 (causa 2875/11 decidida en esta misma fecha).

En definitiva, la recurrente no ha demostrado que la providencia dictada el 8-4-2011 por un vocal de la CNDC -como consecuencia de la Resol. 5/11 que hizo lugar en forma parcial a la prueba ofrecida por la Asociación, la cual no fue recurrida ni oportunamente impugnada (ver fs. 2421/24 y 2426 de las actuaciones administrativas)- o que los actos posteriores que guardan relación con aquélla, dictados durante el procedimiento reglado en los arts. 26 y siguientes de la ley 25.156, son definitivos o susceptibles de generarle un gravamen irreparable que justifique ampliar los supuestos previstos en el art. 52 de la LDC, y de ese modo habilitar la revisión judicial allí prevista, de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala a partir de la causa 2929/02 del 15-8-2002 (ver, asimismo, causas 9628/02 del 29-10-2002, 1029/03 del 24-5-2004 y, en especial, la resolución dictada en la fecha en la causa 2875/11 citada).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:** desestimar la queja deducida por la Asociación.

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, remítase copia de esta resolución a la CNDC mediante oficio y archívese.

Poder Judicial de la Nación

SALA CIVIL Y COMERCIAL N° 3

Registrado al N° 8467° 3

DEL LIBRO DE SENTENCIAS


CARLOS A. PETRE
SECRETARIO

USN